



# Entidades del sector social piden más recursos al Govern

● Sindicatos, patronales y asociaciones del tercer sector reclaman pasar del 0,5 al 2% del PIB en los Presupuestos de la Generalitat ● Se marcan el objetivo de que ningún salario de los empleados sea inferior a 14.000 euros anuales

BARCELONA

Un total de 12 organizaciones sindicales, patronales, asociaciones del tercer sector y representantes de colectivos profesionales reclaman a la Generalitat una mayor inversión en el sector social y de atención a las personas en los Presupuestos de 2020, tal y como constataron en un manifiesto firmado ayer.

Los representantes de la Mesa unitaria en defensa del sector social y atención a las personas de Cataluña reclaman «unas políticas públicas –como la renta garantizada de ciudadanía o el pacto nacional para la Interculturalidad– que aseguren la cobertura de los derechos

sociales, la calidad de atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales».

Las entidades firmantes del manifiesto alertaron ayer de la situación de «infrafinanciación crónica» que sufre el sector desde hace más de diez años y de la necesidad «urgente» de dotar al sector social de los recursos públicos adecuados para fortalecerlo. La congelación de los salarios, el aumento de la demanda de atención a personas mayores, la llegada creciente de menores no acompañados y el precio de los comedores de 6,20 euros al día por niño, que no ha sido revisado desde 2007, según el presi-

dente de la Confederación del Tercer Sector Social de Cataluña, Joan Segarra, son algunos de los ejemplos de la situación «crítica» en la que se encuentra el sector.

«Se tendrían que inyectar entre 600 y 900 millones de euros en los servicios de atención a las personas con discapacidad, a la infancia y a personas mayores para poder empezar a recuperarnos de estos diez años de congelación salarial», argumentó Segarra.

Otra de las demandas del manifiesto es apostar por un aumento de la inversión en el sector del 0,5% del PIB al 2%, como en muchos países europeos, con el objetivo de

conseguirlo en siete años, según la propuesta explicada por la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual.

El manifiesto reclama asegurar la cobertura de los derechos sociales, así como la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, que alertan que se han visto afectados por la falta de recursos, en un sector en el que el 75% de los trabajadores son mujeres. La Mesa ha concluido que una correcta inversión en el sistema de servicios a las personas revertirá en la mejora de las condiciones labora-

les, «posibilitando alcanzar en las mesas de negociación colectiva el objetivo compartido de no tener ningún salario por debajo de los 14.000 euros» anuales, informa Efe.

Además de la firma del manifiesto, la Mesa unitaria en defensa del sector social y de atención a las personas se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Quim Torra; al vicepresidente, Pere Aragonès; y al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani. En los próximos días hará lo mismo con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los presidentes de los grupos políticos de la Cámara para pedir reuniones urgentes.



Los representantes de las 12 entidades que ayer firmaron el manifiesto en defensa del sector social y de atención a las personas. EUROPA PRESS

## Cs ve a Colau «cómplice» con los 'manteros'

Guilarte censura la contratación de vendedores ambulantes como vigilantes de seguridad

BARCELONA

Ciudadanos acusó ayer a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de estar siendo «cómplice con la venta ilegal» después de que este diario revelase que el Ayuntamiento de Barcelona contrató a *manteros* como vigilantes en la feria navideña de 2017.

La presidenta de la formación naranja en el Consistorio, Luz Guilarte, consideró «inadmisible» que Colau

«subvencione y asigne contratos a dedo a los que practican la venta ilegal de productos en la ciudad».

«La opacidad y el sectarismo político es una práctica generalizada de Colau y los *comunes*. Abusan continuamente de la contratación a dedo como método para beneficiar a empresas y entidades afines sin tener que dar explicaciones», añadió la jefa de filas de Ciudadanos en el Ayun-

tamiento de Barcelona.

Ciudadanos preguntó, asimismo, si el personal de la cooperativa de *manteros* DiomCoop SCCL «contaba con la habilitación y la experiencia necesarias en labores como la seguridad».

El Consistorio barcelonés adjudicó los «servicios de apoyo a la vigilancia» de la feria navideña que organiza anualmente en la céntrica plaza de

Cataluña a DiomCoop SCCL, la cooperativa de vendedores ambulantes que el propio Ejecutivo de Colau impulsó en marzo de 2017 para ofrecer salidas laborales a los extranjeros que hacen de la venta ilegal de productos falsificados en las calles de Barcelona su modo de vida.

El Consistorio abonó a la cooperativa de *manteros* 17.850 euros (21.599 con IVA) el 29 de enero de 2018, a tra-

vés de la Gerencia de Presidencia y Economía, según consta en la factura emitida por DiomCoop SCCL y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Al tratarse de un contrato menor inferior a los 17.999 euros sin IVA para el suministro de servicios, la adjudicación fue directa, es decir a dedo.

En 2018, la cooperativa de *manteros* volvió a ser contratada por el Ayuntamiento de Barcelona para prestar sus servicios en la feria. En esta segunda ocasión, el Consistorio barcelonés contrató a DiomCoop SCCL para llevar a cabo «servicios de apoyo a la infraestructura», según consta en el concepto de la factura, que asciende a 6.611 euros.